

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 449.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00118-00
EJECUTANTE:	RICARDO MORALES TAMAYO
EJECUTADO:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1. ANTECEDENTES

El señor Ricardo Morales Tamayo, a través de apoderado judicial, presenta demanda ejecutiva en contra de la Unidad Nacional de Protección - UNP, con el fin de que se libre mandamiento de pago a su favor por las siguientes sumas de dinero:

“1.- PRIMERA: Librar Mandamiento de Pago a favor de mi prohijado y en contra de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, representado legalmente por su director, o quien haga sus veces, por las siguientes sumas de dinero:

A. El capital causado desde el 20 de enero del 2009 a 31 de marzo de 2011, representado en: compensación en dinero por bonificación por servicios en: (1.799.525), prima de servicios en: (2.985.937), prima de vacaciones en: (2.707.619), prima de navidad en: (3.962.130), auxilio cesantías en: (4.258.351), intereses de cesantías en: (453.207), prima de riesgo en: (12.741.750), vacaciones en: (3.693.452), bonificaciones recreación en: (235.737); desglosados cada uno en la respuesta de la UNP del 12 de febrero de 2018 que se anexa, por un valor que sumado arroja un total de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE. (\$32.837.708).

B. Por la correspondiente liquidación con intereses en derechos laborales a la fecha de corte de 28 de febrero de 2018, la suma total de esta sentencia es de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$56.068.973).

C. Solicito que los intereses causados de acuerdo con los montos de dinero anteriormente relacionados se actualicen a la fecha efectiva del pago.

D. Por los costas y agencias en derechos condenadas en el proceso ordinario, así como las que genere el presente trámite ejecutivo.”

Mediante auto interlocutorio No. 358 del 06 de agosto de 2021, el Despacho procedió a librar mandamiento de pago a favor de la parte ejecutante, por las siguientes sumas de dinero:

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – U.N.P., y a favor del señor RICARDO MORALES TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía no. 16.548.077., por las siguientes sumas de dinero:

- Por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/TE. (\$ 32.837.708), por concepto de capital proveniente del reconocimiento de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en virtud de la existencia de la relación laboral que se configuró, por el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2011.

- Por la suma que resulte de liquidar el concepto de intereses, los cuales se tasaran de acuerdo a lo ordenado en las sentencias que conforman el título base de ejecución”.

Lo anterior, conforme a lo ordenado en la sentencia fechada el 31 de octubre de 2016, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión – Sede Bogotá, por medio de la cual se confirmó la sentencia del 09 de agosto de 2013, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Cali, que accedió a las pretensiones de la demanda y aclaró el numeral 3° de dicha providencia.

El auto por medio del cual se libró mandamiento de pago, fue notificado personalmente a la Unidad Nacional de Protección, el 24 de agosto de 2021, a través del correo electrónico de notificaciones judiciales, tal como consta en el documento 08 del expediente electrónico del proceso.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Unidad Nacional de Protección – UNP, no se pronunció dentro del término concedido para contestar la demanda ejecutiva y proponer excepciones, conforme lo prevé el artículo 442 del Código General del Proceso. No obstante, se advierte que presentó en forma extemporánea la contestación de la demanda mediante memorial allegado a través de los canales digitales del Juzgado el 15 de septiembre de 2021, a las 10:40 de la noche, por lo que quedó registrada en el sistema con fecha de recibido 16 de septiembre de 2021 y el término de traslado había fenecido desde el 09 de septiembre de 2021.

3. CONSIDERACIONES

3.1. MARCO NORMATIVO

En principio, resulta necesario reiterar que el numeral 6° del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocería de los ***ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*** (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, constituyen título ejecutivo, entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas

proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Por su parte, el artículo 422 del Código General del Proceso, lo siguiente:

“ARTÍCULO 422. TÍTULOS EJECUTIVOS. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley”. (Negrillas del Despacho).

A su turno, el artículo 424 ibídem, dispone *“si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe. Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas. Cuando se pidan intereses, y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar el porcentaje de la misma”*.

Ahora bien, el artículo 440 del C.G.P.¹ dispone que si el ejecutado no propone las excepciones enlistadas en el numeral 2º del artículo 442 ibídem, tal como sucedió en el caso concreto, se ordenará por auto seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el auto de mandamiento de pago, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.

Teniendo de presente los requisitos que exige el artículo 422 del C.G.P. y como quiera que la parte ejecutada no propuso excepciones de mérito, se entienden afianzadas las aserciones efectuadas en la demanda ejecutiva, manteniéndose inalterable la eficacia del título ejecutivo presentado.

3.2. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Es evidente que los procesos de ejecución deberán apoyarse indefectiblemente, en todos los casos, en un documento que contenga una obligación reconocida y cierta y que se denomina título ejecutivo.

Indiscutible es también que cualquier proceso de ejecución lo constituye la existencia de un título ejecutivo, por consiguiente, no puede haber jamás ejecución sin un documento con la calidad de título ejecutivo que la respalde, revistiendo por lo tanto el carácter de requisito *ad solemnitatem* y no simplemente *ad probationem*.

En el presente asunto, el título contentivo de la obligación que dio génesis a este proceso, dimana de la sentencia fechada el 31 de octubre de 2016, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión – Sede Bogotá, por medio de la

¹ “**Artículo 440. Cumplimiento de la obligación, orden de ejecución y condena en costas.** Cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se condenará en costas al ejecutado, quien sin embargo, podrá pedir dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que las imponga, que se le exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle. Esta petición se tramitará como incidente que no impedirá la entrega al demandante del valor del crédito.

Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. (Subraya del Despacho).”

cual se confirmó la sentencia del 09 de agosto de 2013, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Cali, que accedió a las pretensiones de la demanda y aclaró el numeral 3° de dicha providencia. En dicha providencia se ordenó:

“...SEGUNDO: ACLARAR el numeral 3° de la sentencia del 09 de agosto de 2013, el cual quedará así:

***TERCERO:** Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se CONDENA al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS “EN PROCESO DE SUPRESION” – UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION – U.N.P., a reconocer y pagar a favor del señor RICARDO MORALES TAMAYO, todas y cada una de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en virtud de la existencia de la relación laboral que se configuró, por los periodos en que fue contratado, es decir, por el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2011.*

El salario que deberá tener en cuenta la entidad como base para liquidar las prestaciones, será el que devengaba otro funcionario en un cargo equivalente o, el valor de lo pactado en los contratos u órdenes de trabajo, si aquel es inferior.”

Así las cosas, siendo que el título ejecutivo base de recaudo contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, el Despacho se pronunciará en los términos recomendados en el artículo 440 del C.G.P., ordenando seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas a la parte ejecutada.

4. SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE LITISCONSORTE NECESARIO

Finalmente, se observa que el apoderado judicial de la Unidad Nacional de Protección – U.N.P., mediante memorial allegado a través de los canales digitales el 15 de septiembre de 2021, a las 10:40 de la noche, registrado en el sistema el 16 de septiembre de 2021, solicitó la vinculación de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al presente asunto, en calidad de litisconsorte necesario, al considerar que dicha entidad es la encargada de proveer los recursos presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la sentencia título base de ejecución, conforme lo prevé el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, que dispone en su artículo 8° lo siguiente:

“Artículo 8°. Pago de sentencias judiciales. El pago de las sentencias judiciales que se encuentren debidamente ejecutoriadas al cierre del proceso de Supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo efectuará la entidad a la cual le haya correspondido el proceso judicial, de acuerdo con lo señalado en el presente decreto, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le proveerá los recursos presupuestales que sean necesarios.”

En lo que corresponde a la figura jurídica del litisconsorte necesario, debe indicarse que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no regula esta figura y la integración del contradictorio, por lo que opera el principio de integración normativa, aplicándose lo consagrado en el Código General del Proceso, en los siguientes términos:

“(...) Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de

manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas, si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. (...)” (Negrillas del despacho).

De otro lado, los artículos 1570 y 1571 del Código Civil prescriben que, en el caso de obligaciones solidarias, cualquiera de los acreedores puede exigir el todo de la obligación (solidaridad activa) y cada uno de los deudores está obligado por el todo (solidaridad pasiva), por lo que es posible que uno o varios acreedores demanden a uno o varios deudores, sin que sea necesaria la presencia de todos, pero los fenómenos de extinción de la obligación operarán de igual manera respecto de quienes participaron en el proceso como respecto de los ausentes.

En este orden de ideas, y descendiendo al caso concreto, el Despacho considera que no hay lugar a vincular en calidad de litisconsorte necesario al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, toda vez que la sentencia fechada el 31 de octubre de 2016, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión – Sede Bogotá, por medio de la cual se confirmó la sentencia del 09 de agosto de 2013, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Cali, que accedió a las pretensiones de la demanda y aclaró el numeral 3º de dicha providencia, contiene una obligación a cargo de la Unidad Nacional de Protección U.N.P., sin que se avizore una solidaridad con dicha cartera ministerial en lo que respecta a la satisfacción del derecho incorporado en el título base de recaudo.

Es decir que, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es un deudor solidario ni tiene una relación jurídica sustancial que implique que el proceso ejecutivo de la referencia no pueda resolverse sin su presencia, pues es claro que la obligación se impuso a cargo de la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. Además, el artículo 8º del Decreto 1303 de 2014, invocado por la parte ejecutada, es claro en determinar que *“El pago de las sentencias judiciales que se encuentren debidamente ejecutoriadas al cierre del proceso de Supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo efectuará la entidad a la cual le haya correspondido el proceso judicial, de acuerdo con lo señalado en el presente decreto”*, que en este caso le corresponde única y exclusivamente a la U.N.P., situación que es independiente y ajena al trámite administrativo interno que debe adelantar ante dicho Ministerio para obtener los recursos presupuestales que requiere para atender las obligaciones que se encuentran a su cargo.

Es importante destacar, que a través de este proceso ejecutivo resultaría improcedente ordenarle al Ministerio de Hacienda y Crédito Público **girarle** a la unidad Nacional de Protección U.N.P., los recursos presupuestales que se requieren para atender la obligación objeto de ejecución, pues se reitera, tal situación corresponde a un aspecto que escapa del resorte del Juez de ejecución, a quien únicamente le compete ejecutar las obligaciones que consten en un documento o documentos auténticos, que conformen una unidad jurídica, que emanen de actos o contratos del deudor o causante (títulos contractuales), o de una sentencia de condena proferida por el juez (títulos judiciales), como en este caso y, que en dicho documento aparezca, a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación **clara, expresa y exigible**.

Y es aquí, en donde se advierte que tampoco habría lugar a vincular como litisconsorte necesario al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si se tiene en cuenta que las sentencias que conforman el título base de recaudo no contienen una obligación *expresa* frente a dicha cartera Ministerial, dado que la obligación ahí contenida se encuentra únicamente a cargo de la Unidad Nacional de Protección U.N.P.

De manera que, al ser posible continuar la ejecución sin la comparecencia de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se denegará la solicitud de vinculación de litisconsorte necesario, formulada por el apoderado judicial de la entidad ejecutada, Unidad Nacional de Protección U.N.P.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de integración de litisconsorte necesario de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, formulada por el apoderado judicial de la entidad ejecutada, Unidad Nacional de Protección U.N.P., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE la ejecución a favor del señor **RICARDO MORALES TAMAYO**, identificado con cédula de ciudadanía no. 16.548.077 y, en contra de la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – U.N.P.**, tal y como se dispuso en auto interlocutorio No. 358 del 06 de agosto de 2021, a través del cual se libró mandamiento de pago y, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia.

TERCERO: PRACTICAR la liquidación del crédito de conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso. Para tal efecto, se concede a las partes intervinientes el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, para presentar la liquidación del crédito respectiva.

CUARTO: ADVERTIR que, al momento de practicarse la liquidación del crédito, el Despacho se pronunciara sobre el incidente por regulación o pérdida de interés formulado por la entidad ejecutada.

QUINTO: CONDENAR EN COSTAS a la parte ejecutada. Por secretaría se liquidarán.

SEXTO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** que deben enviar un ejemplar de los memoriales presentados, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

SÉPTIMO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433

✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son: **Teléfonos: (2) 896-24-12 // (2) 896-24-11**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

LCMS.

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Valle Del Cauca - Cali

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

a80a6ba7c6614d35113cbca72b217a9ea016b2f20364a1cb48bab23fef0e9a81

Documento generado en 21/09/2021 03:02:57 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>